



Pronunciamento de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares:

Agravamiento de los problemas del país y ausencia de soluciones reales, caracterizan al año 2021

Los diferentes sectores de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares hacemos un balance negativo del año que está terminando, debido a que éste se ha caracterizado por un agravamiento sin precedentes de los problemas del país y por la ausencia de medidas de solución real, más allá de la propaganda, la demagogia y falsas propuestas del gobierno de Nayib Bukele.

En el ámbito económico señalamos el aumento de los precios de los productos básicos, el alto costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo. La crisis de las finanzas estatales se agravó debido al aumento exponencial del endeudamiento externo e interno, la falta de una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, el despilfarro de dinero público y la corrupción generalizada en el gobierno. La lógica neoliberal se ha profundizado y la gran novedad de la administración Bukele es la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, medida que es presentada como la panacea para resolver los problemas del país.

En relación al medioambiente tenemos una profundización del grave deterioro ecológico debido a la ausencia de políticas de saneamiento, descontaminación y protección de los bienes hídricos. Esta situación podría ser peor con la autorización de obras urbanísticas como Valle El Ángel, otros proyectos depredadores del ecosistema y -más recientemente- el regreso de la amenaza de la minería metálica, con la aprobación de una nueva ley y la incorporación de El Salvador a un foro internacional que promueve esta nociva industria extractiva, a pesar de que en el país existe desde 2017 una ley que la prohíbe en forma definitiva.

En seguridad pública las desapariciones marcan esta triste realidad que el gobierno y su Fiscalía se empeñan en ocultar, minimizar o culpar a las víctimas y a sus familiares por el problema. La publicitada “reducción de asesinatos” que el gobierno presenta como logro del desconocido “Plan Control Territorial” queda desmentida por las desapariciones y empañada por un oscuro pacto con las maras que ha sido revelado por el periodismo investigativo. El país sigue careciendo de una política real de seguridad pública que combine integralmente persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia.

En materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, el retroceso es descomunal. El gobierno aprovechó la pandemia del COVID-19 para poner en cuarentena

también la información, terminó de cooptar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aprobó la “Ley Alabí” para no rendir cuentas, cerró la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) para que ya no investigara más la corrupción y nombró a un fiscal general afín que se hace el desentendido con la corrupción y demás anomalías, irregularidades y arbitrariedades del gobierno.

El manejo de la pandemia, que el gobierno exhibe -junto a la “reducción de homicidios”- como un gran logro, tiene muchos aspectos cuestionables, principalmente la falta de información creíble sobre la situación de la emergencia sanitaria, la aplicación de algunos protocolos y la intransparencia en el uso de los fondos. Además, el gobierno se ha desatendido de otras enfermedades, abandonó por completo el enfoque preventivo y desmanteló lo que quedaba de la reforma de salud. A esto se suman reformas al Código de Salud que eliminaron requisitos ambientales y sanitarios a las construcciones, lo cual representa amenazas adicionales a la salud de la población.

El drama migratorio también adquirió dimensiones alarmantes. Cientos de salvadoreños y salvadoreñas abandonan diariamente el país debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. El gobierno hace poco o nada para evitar que la gente se vaya y tampoco aboga por sus derechos como migrantes. Bukele jamás ha alzado la voz por los migrantes salvadoreños y -dada la confrontación que mantiene con el gobierno de Estados Unidos- tiene nulas posibilidades de interceder ante las autoridades norteamericanas por una reforma migratoria que beneficie a los compatriotas que viven indocumentados o en situación legal irregular.

Finalmente, en cuanto a institucionalidad democrática, el oficialismo tomó el control total del aparato estatal y así acabó con la separación de poderes, la independencia judicial y el imperio de la legalidad, especialmente arbitraria y de graves consecuencias fue la destitución del Fiscal y de los magistrados de la Sala Constitucional. Bukele y su gobierno también vulneran la libertad de expresión y de prensa, mantienen un discurso de odio y confrontación, persiguen a quienes considera opositores, incluidos periodistas, analistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Bukele también va tras una nueva Constitución y por la reelección presidencial.

Por eso, frente a todo esto, como Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares llamamos a la sociedad salvadoreña a exigir un cambio de rumbo en la forma de gobernar y en las políticas públicas, antes que sea demasiado tarde.

San Salvador, 21 de diciembre de 2021.